

Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que, ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio, en procedimiento de tutela laboral, en los autos **RIT T-1589-2021**, por denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones y demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones.

La demanda fue interpuesta por doña **HERTHA EUGENIA DEL CARMEN MUÑOZ ESCOBAR**, cédula de identidad N° 10.613.932-6, funcionaria pública, Administrador Público, domiciliada en Avenida El Rosal N° 4403.

A su vez, la demanda se interpuso en contra de la **DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL**, RUT N° 61.608.600-6, representada legalmente por don Jorge Marcel Wilhelm Del Villar, abogado, cédula de identidad N° 13.922.846-4, Jefe Superior (S) del Servicio de Salud Metropolitano Central, del mismo RUT N° 61.608.600-6, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Victoria Subercaseaux N° 381, piso 6, comuna de Santiago.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña **HERTHA EUGENIA DEL CARMEN MUÑOZ ESCOBAR**, cédula de identidad N° 10.613.932-6, funcionaria pública, Administrador Público, domiciliada en Avenida El Rosal N° 4403, quien interpone denuncia por vulneración de derechos fundamentales, en contra de la **DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL**, RUT N° 61.608.600-6, representada legalmente por don Jorge Marcel Wilhelm Del Villar, abogado, cédula de identidad N° 13.922.846-4, Jefe Superior (S) del Servicio de Salud Metropolitano Central, del mismo RUT N° 61.608.600-6, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Victoria Subercaseaux N° 381, piso 6, comuna de Santiago.

Fundamenta su demanda señalando, en síntesis, que con fecha 22 de febrero de 2021 fue notificada mediante correo electrónico de la Resolución N° 47 de la Contraloría General de la República, que se abstiene de resolver el reclamo Folio R273-21, sobre recurso de reposición de la Resolución N° 233-2020, notificada el 14 de enero de 2021, que omite cursar los reclamos de ilegalidad, Folios R130, R219, R220 y R405, todos del año 2020, referidos a la no dictación de acto de renovación del contrato funcionario del año 2019, Resolución N° 6031 de 2018.

Explica que no habría causa legal para que el Servicio de Salud Metropolitano Central no renovara el contrato funcionario de resolución N° 6031 de 2018 y que aquello implicó que la actora no registrara sus licencias médicas asociadas a dicho contrato funcionario, y su pago, constituyendo aquello una discriminación por enfermedad, vulneración de sus derechos laborales y derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Sostiene que el plazo para accionar estaría suspendido por reclamo R273-21, de fecha 20 de enero de 2021, reposición de resolución 233-2020, notificada el 14 de enero de 2021 ante la autoridad administrativa fiscalizadora y del control de legalidad competente, en este caso la Contraloría, que se abstuvo de resolver mediante resolución N° 47 de fecha 22 de febrero de 2021, notificada con fecha 22 de febrero de 2021, mediante correo electrónico.

Menciona que actualmente existe un proceso judicial pendiente, entre las mismas partes, además de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), y la Superintendencia de Seguridad Social, quienes



detentan la calidad de recurridos, signado con el Rol Ingreso de Corte N° 20.049-2021 seguido ante la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se conoce recurso de protección interpuesto por la denunciante motivado en el rechazo de licencias médicas posteriores a la dictación de la resolución exenta RA 385/2018, que destina a doña Hertha Muñoz Escobar al Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU Metropolitano), esto es, aquellas otorgadas desde el 28 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021.

Afirma que en presentación posterior que efectúa en el proceso donde se ventila la referida acción de protección, la recurrente alude a la calidad de título ejecutivo de sus licencias médicas, y que habrían sido ilegalmente rechazadas por la demandada, en atención a que se originarían en la referida Resolución Ex RA 385/2018, que destina a la denunciante al SAMU Metropolitano, cuestionando tanto su legalidad como su mérito.

Indica que con fecha 22 de marzo del año 2019, fue notificada por parte del Jefe de Gestión y Desarrollo de las Personas, del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria SAMU, a realizar cambio de empleador y adjunta la Resolución Exenta RA N° 16675/385/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, respecto de la cual, reitera su desacuerdo.

Alude también al procedimiento de tutela de vulneración de derechos fundamentales con vigencia de relación estatutaria que interpuso doña Hertha Muñoz Escobar en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, autos RIT T-1987-2019 de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo, que se encuentra pendiente de resolución recurso de nulidad presentado por la denunciante, respecto de sentencia definitiva que rechazó la denuncia que se había fundado en que la dictación de la Resolución Exenta N°116675/385/2018 de 18 de diciembre de 2018, que la habría destinado injustamente al SAMU Metropolitano, y de actos posteriores que también califica de vulneratorios, originados en dicho acto administrativo, tales como el supuesto no pago de remuneraciones y rechazo de licencias médicas.

Sostiene que ambos procedimientos no serían óbice para impetrar la presente denuncia, en atención a que en ninguno de dichos procesos se habría ventilado la no renovación de contrata, dispuesta mediante Resolución N° 6031 de 2018, del año 2019.

Afirma que la demandada habría incurrido en actos vulneratorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N° 1 y N° 16 de la Constitución Política y acto de discriminación, en la no dictación de acto de renovación de contrato funcionario Resolución N° 6031 de 2018 y supuestos actos de obstrucción de su derecho al uso legítimo de licencias médicas.

Previas citas legales y constitucionales solicita que se acoja la demanda y en definitiva se declare: 1) la existencia de la lesión al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política; 2) que se declare la existencia de los actos arbitrarios con motivos de discriminación por enfermedad representado por la no dictación de acto para concesión de las licencias médicas y vulneración del derecho a estabilidad en el empleo y derecho a la función, con motivo de la no tramitación de contrato funcionario para propiciar la no dictación de acto de su renovación; 3) que la demandada debe cesar en forma inmediata su comportamiento antijurídico, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 492 del Código del Trabajo, disponiendo en la primera resolución que dicte, la suspensión de los efectos del acto impugnado



Resolución Exenta N° 5926 de 31 de diciembre de 2019, sobre renovaciones de contrato del año 2020 y Resolución N° 5853 de 29 de diciembre de 2020, mediante las que la denunciada dispone la prórroga de contratos de funcionarios de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central para el año 2021, en la medida que omite ilícitamente incorporar a la denunciante que es parte de la dotación de la denunciada, atendido la gravedad de los antecedentes acompañados; 4) que se disponga el cumplimiento de obligaciones que emanan de los títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorgan mérito ejecutivo (artículo 464 N° 6, del Código del Trabajo y el artículo 434 N° 7, del Código de Procedimiento Civil), conforme a sus facultades establecidas en el artículo 420, letras a), c) y d), del Código del Trabajo, como las licencias médica reseñadas en el presente libelo de tutela, cuyo monto adeudado asciende aproximadamente a \$56.084.717, aumentado en la suma resultante del monto mensual de remuneración equivalente a \$1.755.392, por la cantidad de meses en que se resuelva el presente litigio que estima en unos \$17.553.920, que resulta en un total de \$73.638.637; 5) que la denunciada debe dar cumplimiento a su obligación constitucional de dictar resoluciones para la concesión del derecho de los títulos ejecutivos que se adjuntan en estos autos, conforme al mandato del artículo 5° inciso segundo de dicho D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, que dispone que las licencias médicas de los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, “serán concedidas por resolución del Servicio a que el funcionario pertenece”, las que deberá someter a control de legalidad de registro ante la Contraloría para el control constitucional obligatorio conforme a los artículos 98° y 99° de la CPR y su relación con el artículo 10° de la ley N° 10.336, orgánica de Contraloría, conforme a la Resolución N° 6031 de 2019 y Resolución N° 18 de 2017, sobre tramitación en el Sistema de Información y Control del Personal del Estado (SIAPER) de Contraloría para su control legal de Registro; 6) que se declare que la medida ilegal de no dictación de acto de renovación de contrato Resolución N° 6031 de fecha 24 de diciembre de 2018, es vulneratorio de los derechos fundamentales del artículo 2 del Código del Trabajo por discriminación, en circunstancias que la suscrita mantiene vínculo laboral vigente e indefinido con la institución Dirección de Servicio, RUT N° 61.608.600-6, y a que la institución no ha dictado resolución alguna de renovación de contrato, solicitando se aplique al respecto lo regulado por la autoridad administrativa del control constitucional Contraloría General de la República, en su jurisprudencia aplicable Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016 en lo atinente en su apartado VII, sobre consecuencias de la no dictación o insuficiente fundamentación del acto que determina la no renovación de la contrata, que señala que corresponde entender que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos a la existente al 31 de diciembre de la anualidad respectiva, y por todo el año siguiente, esto es, el contrato de la suscrita renovado por el año 2019, mediante resolución exenta N° 6031 de fecha 24 de diciembre de 2018, en la “Dirección de Servicio” código 1315, y sucesivamente respecto del año 2021; 7) como medidas reparatorias de la conducta lesiva de sus derechos fundamentales, a fin de reparar íntegramente a la afectada, pide que se condene a la denunciada al resarcimiento de los daños morales, calculando la indemnización por daño moral que es avaluado en la suma de \$56.084.717, que corresponde al monto del cual la demandada la ha privado de su uso de derechos legítimos adquiridos por los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que la institución la ha privado atendido los actos discriminatorios



por enfermedad, no dictando los actos del reconocimiento de los títulos ejecutivos correspondiente a licencias médicas desde el 20 de diciembre de 2018 al mes de noviembre de 2021, cuya remuneración se ha apropiado indebidamente, o la suma mayor o menor que el tribunal determine en atención a los antecedentes del proceso, considerando el aumento de lo adeudado durante el tiempo del curso de la denuncia que estimamos como mínimo en unos seis meses adicionales; 8) publicación de la sentencia en la página web de la Dirección del Trabajo y del Servicio Civil; 9) que, se condene a la denunciada al máximo de la multa administrativa o lo que el tribunal estime; 10) reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; 11) que la denunciada deberá pagar las costas de la causa.

En la suma de su escrito, señala en el primer otrosí, que en subsidio, interpone demanda de *“despido injustificado y realizado por institución que no es su empleadora mediante el uso ilícito de acto derogado”* y en el cuerpo de su escrito, en el primer otrosí, señala que interpone demanda *“por despido injustificado, indebido o improcedente y en lo pertinente de tutela laboral y el cobro de indemnizaciones por daño moral que apliquen en contra del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU), RUT: 61.999.030-7, que corresponde a institución pública que no es mi empleador, cuyo Director (S) es Don Rubén Carvacho Sáez, ignoro cédula de identidad estado civil y oficio, domiciliado para estos efectos en calle Nueva Buera 176, Santiago, representado legalmente por Don JORGE MARCEL WILHELM DEL VILLAR, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 13.922.846-4, Jefe Superior (S) del SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL, RUT: 61.608.600-6, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Victoria Subercaseaux N° 381, piso 6, Santiago, para que SS., conforme a la relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho que han sido expuestos EN LO PRINCIPAL de esta presentación, los que doy por expresamente reproducidos –por economía procesal– para todos los efectos legales y en virtud de ellos solicitó que tenga a bien, declarar la nulidad del acto Administrativo dictado por el Director de dicho Centro Metropolitano Resolución Exenta N° 735, de fecha 27 de noviembre de 2019, mediante el que dispone la no renovación del que considera contrato “Resolución N° 385 de fecha 18 de diciembre de 2018”.*

En virtud de sus alegaciones de hecho y de derecho solicita que: 1) se declare la existencia de la lesión al derecho a la vida a la integridad física y psíquica de la persona, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, entendiéndose el derecho a la vida en un sentido amplio como derecho a una vida digna; 2) que se declare la existencia de los actos arbitrarios con motivos de discriminación por enfermedad representado por la dictación de acto que adolece de objeto ilícito, por faltas de competencia por no detentar la demandada de empleador, y de falsa motivación por fundarse en acto administrativo derogado Resolución N° 385 de 2018, que tiene un origen espurio; 3) que la demandada debe cesar en forma inmediata su comportamiento antijurídico, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 492 del Código del Trabajo; 4) que se declare que la medida ilegal de dictación Resolución N° 735 de fecha 27 de noviembre de 2019 dictado por la institución Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU) RUT 61.999.030-7, de acto de no renovación de su contrato funcionario Resolución N° 6031 de 2018, de la Dirección de Servicio RUT N° 61.608.600-6, es vulneratorio de los derechos fundamentales del 19, N° 1 y 16 de la Carta fundamental y del artículo 2 del Código del Trabajo por discriminación, en circunstancias que la suscrita mantiene



vínculo laboral vigente e indefinido con la institución Dirección de Servicio, RUT N° 61.608.600-6, y a que la institución no ha dictado resolución alguna de renovación de contrato, solicitando se aplique al respecto lo regulado por la autoridad administrativa del control constitucional Contraloría General de la República, en su jurisprudencia aplicable Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016 en lo atinente en su apartado VII, sobre consecuencias de la no dictación o insuficiente fundamentación del acto que determina la no renovación de la contrata, que señala que corresponde entender que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos a la existente al 31 de diciembre de la anualidad respectiva, y por todo el año siguiente, esto es, el contrato de la suscrita renovado por el año 2019, mediante resolución exenta N° 6031 de fecha 24 de diciembre de 2018, en la “Dirección de Servicio” código 1315, y sucesivamente respecto del año 2021. 7) Como medidas reparatorias de la conducta lesiva de sus derechos fundamentales, a fin de reparar íntegramente a la afectada: que se condene a la denunciada al resarcimiento de los daños morales, calculando la indemnización por daño moral que es avaluado en la suma de \$56.084.717, que corresponde al monto del cual la demandada la ha privado de su uso de derechos legítimos adquiridos por los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que la institución la ha privado atendido los actos discriminatorios que adolecen de objeto ilícito. En subsidio, la suma mayor o menor que el tribunal. se sirva fijar, de acuerdo a la justicia y mérito del proceso, considerando el aumento de lo adeudado considerando el tiempo del curso de la denuncia que estima en unos diez meses adicionales; 8) publicación de la sentencia en la página web de la Dirección del Trabajo y del Servicio Civil; 9) que, se condene a la denunciada al máximo de la multa administrativa o lo que el tribunal estime; 10) reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; 11) que la denunciada deberá pagar las costas de la causa.

SEGUNDO: Que, la abogada Valentina Lazo Chacón, en representación del **SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL**, contesta tanto la denuncia principal, como la demanda subsidiaria, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que el Servicio de Salud Metropolitano Central es un Servicio Público descentralizado, en los términos definidos por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, formando parte de la administración descentralizada del Estado, al tenor de lo prevenido en los artículos 29 y 1 del Decreto con Fuerza de Ley N°1-19653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Explica que, por otra parte el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU Metropolitano) es un Establecimiento que funciona con delegación de funciones, pues en virtud de Resolución Exenta N°420 de 29 de noviembre de 2016, es creado, delegándose por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Central, las facultades relativas a recursos físicos y gestión, al Director del referido Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU Metropolitano), así es como, este último se encuentra facultado para determinar su organización, fijar su estructura interna y aprobar su organigrama, previa visación de la Dirección del SSMC, por Resolución Exenta N°0442, de 23 de marzo de 2018, establecido por Resolución Exenta N°649, de 22 de agosto de 2018.

Menciona que existe un acto administrativo que es fundamental, para poder comprender el curso de los hechos planteados en este juicio, aquel es, la Resolución Exenta RA N° 116675/385/2018 de 18 de diciembre de 2018, que dispuso la destinación de la denunciante al SAMU Metropolitano. Acto administrativo respecto



del cual no corresponde cuestionar su legalidad, pues ya la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago mediante sentencia firme expresó que es un acto legal, en autos Rol N° 4159-2019, siendo además oficializado por la Contraloría General de la República.

Afirma que, de aquello, no cabe más que concluir, y sin perjuicio de las defensas que se opondrán en acápite pertinente, que el vínculo estatutario entre la denunciante y el Servicio de Salud Metropolitano Central, únicamente cabe situarlo hasta la dictación de la mentada Resolución Exenta RA N°116675/385/2018 de 18 de diciembre de 2018.

Señala que de los antecedentes que la propia demandante acompaña a su libelo de demanda, fue una funcionaria pública que debía desempeñarse en el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria, al haber sido destinada dentro del territorio nacional por razones de buen servicio, para realizar funciones como profesional, resolución que fue registrada en la Contraloría General de la República con fecha 18 de diciembre de 2018.

Añade que, luego, y nuevamente conforme a los propios dichos expresados en la demanda, en virtud de resolución exenta N° 735, de 27 de noviembre de 2019, se dispuso por el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria, la no prórroga de la contrata de doña Hertha Muñoz Escobar, para el año 2020.

Expone, en cuanto a las licencias médicas que le fueron otorgadas, que su representada, claramente, tramitó las que correspondieron al mes de diciembre de 2018, estas son LM 1787619-8, por diez días a contar del 21 de diciembre de 2018, y LM 1803240-6, por diez días a contar del 31 de diciembre de 2018. Dicho mes fue pagado íntegramente por su representada, debido a que los procesos de remuneraciones a esa fecha se encuentran totalmente cerrados, por lo que, correspondía su tramitación. De ahí que, toda otra licencia médica presentada por la actora, con posterioridad al mes de diciembre de 2018 fue rechazada, por cuanto, la sra. Hertha Muñoz, pasó a ser funcionaria pública dependiente del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria.

Indica que, despejado lo anterior, se arriba a la conclusión que toda alegación realizada por la demandante a propósito de licencias médicas no tramitadas por su representada u otros actos posteriores a su destinación al SAMU Metropolitano, y que precisamente constituye el fundamento de su acción principal y subsidiaria, no son procedente, y ninguna vulneración a sus derechos fundamentales se constata en los hechos.

Agrega que su representada niega de forma expresa y concreta cualquier vulneración de derechos a la demandante, así como también, niega que exista relación laboral regida por el Código del Trabajo, por ende, no puede existir despido injustificado ni pago de indemnizaciones ni prestaciones laborales.

A continuación, opone la excepción de falta de legitimación activa por preclusión procesal, alegando a improcedencia de ejercer la acción por tutela laboral por haberse interpuesto un recurso de protección.

Explica que el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo establece que: *“interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos”*.

Afirma que con fecha 22 de mayo de 2021, la denunciante interpuso una acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social,



Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y su representada, con el fin de impugnar el actuar del Servicio de Salud Metropolitano Central, a causa del no pago de subsidio o renta por licencias médicas, por actos, que a juicio de la recurrente, serían ilegales y arbitrarios.

Indica que la actora expresó en su recurso de protección, que se trataría de las resoluciones folio 60247054, 60247062, 60459864, 60459865 dictadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana Poniente, por reposos médicos otorgados por licencias médicas continuas del periodo 29 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021 y refiere que dichas licencias médicas no han sido tramitadas por su representada, el Servicio de Salud Metropolitano Central, para el pago de la remuneración o subsidio laboral según corresponda, ni recuperado los subsidios, desde el mes de abril de 2019. Luego agrega que su representada habría hecho pago de las remuneraciones por contraprestación únicamente del periodo diciembre de 2018 a 31 de marzo de 2019. Aduce que las licencias médicas emitidas desde el 21 de diciembre de 2018 al 23 de abril de 2021 y las restantes a la fecha, correspondiente a los procesos de calificación de invalidez expedientes N°255904 y N°311176, se encontrarían protegidos por el vínculo funcionario contractual, el derecho a la seguridad social y seguridad jurídica, originados en derechos adquiridos legítimamente por contratos renovados sucesivamente desde el año 2010. Agrega que las licencias médicas del periodo 29 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021, que fueron rechazadas por la causal “Finiquitado sin vínculo laboral” le provocaría privación, perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 9, 16, 18 y 24 de la Constitución Política de la República. En razón de lo expresado, la recurrente solicita en dicho proceso a la Il. Corte de Apelaciones de Santiago que se acoja la acción de protección y que, en definitiva, disponga deje sin efecto el acto ilegal y arbitrario recurrido, y se ordene el pago de las remuneraciones asociadas.

Sostiene que el referido proceso signado con el Rol 20.049-2021, tramitado ante la Il. Corte de Apelaciones de Santiago en el que se pretende que se disponga la autorización de las licencias médicas rechazadas, basado en los mismos hechos que plantea en su libelo de demanda, se encuentra pendiente de resolución, y a la fecha no se ha realizado la vista de la causa, a causa de sucesivas solicitudes de suspensión realizadas por la propia recurrente.

Indica que es por lo ya expuesto es que se sostiene que la interposición por parte de la denunciante de una acción de tutela de derechos fundamentales basada en los mismos hechos que sustentaron anteriormente un recurso de protección, implica una clara infracción por parte de la actora a lo dispuesto por el artículo 485 del Código del Trabajo, que afecta a este juicio e impide que el tribunal pueda conocer de esta denuncia de tutela interpuesta por la actora.

Añade que, más aún, es menester considerar que ya anteriormente, la demandante había interpuesto una acción de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, en autos Rol N° 4159-2019. En dicho proceso la denunciante de autos, buscaba que se dejara sin efecto la Resolución Exenta RA N°116675/385/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, mediante la cual se le destina para desempeñarse en el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria SAMU, a contar del día 19 del mismo mes y año, y que precisamente marca un hito de suma relevancia, ya que, a partir de la dictación de dicho acto administrativo, la funcionaria comenzó a depender del SAMU Metropolitano, y también la actora



comienza a hacer uso de licencias médicas, indicando como empleador, en todas, al Servicio de Salud Metropolitano Central, en claras circunstancias que su empleador legal era el SAMU.

Señala que la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago mediante sentencia firme de 6 de agosto de 2019, resuelve rechazar la acción de protección. En lo particular, es relevante el motivo sexto de la sentencia *“Que del mérito de los antecedentes aparece que la medida de destinación cuestionada por la recurrente obedece al uso de facultades legales, por lo que no se advierte ilegalidad en dicha resolución, habiéndose fundado aquella en razones de buen servicio. Además de lo anterior, no se advierte que la medida impugnada le cause perjuicio a la recurrente, por cuanto se le ha destinado a funciones análogas en calidad de profesional, que la recurrente tiene, pues se encuentra acreditado que el Administradora Pública. Asimismo, el nuevo recinto se encuentra en la misma comuna que el anterior, y la recurrente mantiene su mismo grado y remuneraciones, por lo que no es posible concluir que dicha medida sea vulneratoria de las garantías fundamentales alegadas en el recurso”*.

Afirma que el ánimo recursivo de la denunciante es inagotable, de modo que, con posterioridad a la dictación de dicha sentencia definitiva firme, con fecha 29 de noviembre de 2019, interpone Tutela de Derechos fundamentales con vigencia de relación laboral, en contra de su representada. En dicho proceso judicial, que actualmente se encuentra sometido al conocimiento de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la demandante alegaba que la destinación implicaba un cambio ilegal de empleador, y que a partir del acto administrativo que lo dispuso, se desencadenaron actos vulneratorios de sus derechos fundamentales, tales como el no pago de remuneraciones, y rechazo de licencias médicas.

Precisa que para ilustrar lo evidente de la similitud de las alegaciones planteadas por la demandante, en distintas oportunidades y transcribe la página 12 del libelo presentado en aquella oportunidad y concluye que se verifica con meridiana claridad una infracción al artículo 485 del Código del Trabajo, que como ya se indicó, afecta a este juicio e impide que el tribunal pueda conocer de esta demanda de tutela.

En subsidio, opone la excepción de caducidad de la acción de tutela laboral intentada en contra de su representada, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 486 del Código del Trabajo.

Menciona que la denunciante indica en la página 7 de su libelo que *“En cuanto al plazo de caducidad, fui notificada por correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2021, de la resolución N°47 de fecha 22 de febrero de 2021, en que la autoridad administrativa competente Contraloría General de la República, se abstiene de resolver el reclamo Folio R273-21, sobre recurso de reposición de resolución 233-2020, notificada el 14 de enero de 2021, que omite cursar reclamos de ilegalidad, Folio R130, R219, R220 y R405, todos del año 2020, referidos a la no dictación de acto de renovación del contrato funcionario del año 2019 (...)”*

Sostiene que lo cierto es que las acciones que se ventilan son las de tutela de derechos fundamentales y subsidiaria de despido injustificado y en ese entendido, el plazo de caducidad establecido por el legislador debe contarse desde la producción de los hechos vulneratorios o de la separación del funcionario.

Precisa que la separación de la funcionaria respecto de su empleadora, SAMU Metropolitano, se produce con la dictación de la Resolución Exenta N° 735 de fecha



27 de noviembre de 2019, razón por cual el plazo de sesenta días se encuentra vencido con creces. Por su parte, considerar que los inagotables reclamos presentados por la denunciante ante el órgano contralor, vendrían, supuestamente, a suspender de forma constante y reiterada el plazo de caducidad, es una situación que se encontraría absolutamente fuera de lugar, pues de acoger tal planteamiento, se estaría burlando la ley, haciendo inaplicable la norma.

Añade que, por lo demás, la Contraloría General de la República, ha archivado las presentaciones formuladas por la actora, relacionadas con la no renovación de su contrata, negativa de recibir y pagar las licencias médicas por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central, y la supuesta retención ilegal de sus remuneraciones, así como relativas a la destinación ordenada por su representada, mediante Resolución Exenta RA N° 385/2018. Dichas presentaciones son archivadas, pues mediante sucesivos oficios evacuados por el órgano contralor desde el 2019 a la fecha, en conformidad al artículo 6°, inciso tercero de la Ley N° 10.336, se ha abstenido de emitir pronunciamiento sobre los mentados reclamos presentados por la denunciante, debido a que todos esos asuntos, que por cierto se vuelven a conocer en esta causa judicial, están en conocimiento de los tribunales de justicia, en causa RIT T-1987-2019 tramitada ante este juzgado.

Señala que la denunciante no expresa los motivos por los cuales no ejerció la tutela laboral oportunamente, pudiendo hacerlo, y al deducir su demanda ahora, en forma completamente extemporánea, pretende que no opere la caducidad bajo la construcción retórica de la continuidad o permanencia de las supuestas vulneraciones. Mas, lo cierto es que tanto por aplicación de la norma contenida en el artículo 486 inciso final o en el artículo 489, tanto si la presente se tratare de una acción de tutela de derechos fundamentales con vigencia de la relación laboral o con ocasión de despido, se encuentran igualmente caducas.

A continuación plantea una controversia formal de los hechos, señalando que su parte niega, controvierte y discute todas y cada una de las aseveraciones contenidas en las demandas interpuestas en estos autos, lo cual unido a los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de base a la defensa que su parte formulará, conducen al rechazo de la demanda principal y subsidiaria de autos, en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Hace presente que la demanda no contiene enunciación alguna de hechos indiciarios de supuestas vulneraciones, sino que, tiende a la confusión, realizando serias imputaciones, mencionando sucesivos actos administrativos a los cuales la demandante los reviste de arbitrariedad e irregularidad, incumpliendo el artículo 490 del Código del Trabajo, en tanto que la denuncia no contiene hechos que permitan sostener la acción, más allá de manifestar su disconformidad con las decisiones adoptadas por el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Añade que las pretensiones de la demandante son improcedentes, pues no se configura ningún presupuesto fáctico indiciario de vulneración de las garantías denunciadas, y por ello no hay justificación de derecho que la habilite a reclamar el pago de indemnizaciones, ni prestaciones laborales, además, por estar sujeto a estatuto distinto al Código del Trabajo, que, en esas materias, no contemplan indemnizaciones ni otras prestaciones como las que regula el Código del Trabajo.

Concluye en este punto que, por todo lo anterior, se niegan en general, la totalidad de las declaraciones y prestaciones reclamadas en las demandas.



Más adelante, opone las excepciones perentorias de falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Metropolitano Central y de falta de legitimación activa de la demandante de autos.

Explica que la acción principal y subsidiaria fueron deducidas por la actora en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, pero la actora comenzó a prestar servicios en calidad de funcionaria pública a contrata, en el Servicio de Salud Metropolitano Central, a partir de 9 de septiembre de 1993, mediante sucesivas renovaciones de contrata, hasta el 18 de diciembre de 2018, fecha en la que se dictó la resolución Exenta RA N°16675/385/2018, que dispuso su destinación dentro del territorio nacional y por razones de buen servicio, para ejercer funciones de Profesional en el Centro Metropolitano de Atención Pre-Hospitalaria, a contar del 19 de diciembre de 2018, todo ello con sujeción a lo el artículo 48 inciso 3° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Ergo, es definitivamente falso que la actora a la fecha de la no renovación de su contrata para el año 2020, tuviese vínculo jurídico de carácter alguno con su representada, el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Afirma que en el caso de marras, la actora se encontraba por Resolución Exenta N° 116675/385/2018 destinada en el territorio nacional y por razones de buen servicio, desde el Servicio de Salud Metropolitano Central, al Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU). Dicha resolución se registró en la Contraloría General de la República con fecha 18 de diciembre del 2018 para cumplirse a contar del 19 de diciembre del mismo año, de ahí que el Servicio de Salud Metropolitano Central, no tiene ninguna legitimación para ser parte en este procedimiento, ya que no existe vínculo jurídico con la demandante. Añade que bajo esa tesitura, es claro concluir que su representada no es empleadora de la demandante, ergo, mi representada carece de legitimación pasiva para actuar en estos autos, siendo un tercero absoluto, pues no existe vínculo alguno con la actora.

Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, la demandante carece de legitimación activa para ejercer esta acción, ya que la relación jurídica que ostentó se encuentra debidamente regida por un estatuto especial, regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y que, como operó en la especie cesó en su cargo, por disposición de la Dirección del SAMU Metropolitano, en orden a no renovar la contrata para el año 2020.

Menciona que, en suma, tanto la acción principal como la subsidiaria, intentadas por la demandante son improcedentes, al carecer del derecho para obtener la satisfacción de las pretensiones contenidas en ella, por cuanto se trataba de una servidora pública que se desempeñaba sus funciones en calidad a contrata para el SAMU Metropolitano, y no, como pretende, con el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Luego, en subsidio, sostiene la inexistencia de actos vulneratorios de derechos fundamentales: falta de indicios.

Expone que el establecimiento que no renueva la contrata de la actora es aquel respecto del cual tenía un vínculo de dependencia funcionaria, pues se encontraba destinada en el SAMU Metropolitano desde diciembre de 2019, luego, por Resolución Exenta N° 735 del SAMU Metropolitano, se dispuso por dicha autoridad la no prórroga de su contrata para el año 2020. Aquella decisión se fundó, según da cuenta el propio acto administrativo en que la denunciante no cumplió con



la destinación dispuesta por resolución exenta N°116675/385/2018, no existiendo antecedentes que pudieran justificar la inasistencia de la ex funcionaria desde el 9 de enero de 2019, ya que al informar la denunciante, como empleador, al Servicio de Salud Metropolitano Central, dejando de serlo, respecto de la denunciante, a partir del 19 de diciembre de 2018, momento en que comenzó a regir la destinación, mi representada no debía más que rechazar las licencias médicas.

Destaca que la destinación al Centro de Atención Prehospitalaria es un acto administrativo, que por tanto goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, en virtud del artículo 3° de la ley 19.880.

Indica que el real objetivo que persigue la denunciante con la interposición de la presente acción de tutela no es otro que atacar el acto administrativo que dispuso su destinación desde el Servicio de Salud Metropolitano Central al Centro de Atención Prehospitalaria. Por ello es que con el ejercicio de la presente acción la denunciante desnaturaliza el procedimiento de tutela laboral, pues de manera evidentemente forzada intenta vincular la dictación del referido acto, con la no renovación de su contrata para el 2020 y 2021, por parte del SSMC, y el rechazo de sus licencias médicas, con una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Añade que la denunciante ignora que el procedimiento de Tutela Laboral fue establecido por el legislador como un mecanismo de resguardo de determinadas garantías constitucionales cuando estas se ven afectadas en el marco de la relación entre empleador y trabajador, por aplicación de las normas laborales, no así para impugnar actos administrativos que como ya se adelantó, gozan de la presunción de legalidad eficacia, imperio y exigibilidad.

Señala que por lo anterior es que la denunciante alega sin fundamento, sin explicación racional y de manera evidentemente forzada, la supuesta vulneración de sus derechos. Mas, de la simple lectura de la demanda, aparece con absoluta claridad que lo buscado por la denunciante es que este tribunal del trabajo revise actuaciones de la autoridad administrativa, cuestión que resulta improcedente, y que por lo demás, ya ha sido revisado tanto por la vía jurisdiccional como administrativa.

Agrega que las únicas licencias médicas que la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano tramitó correspondieron al mes de diciembre de 2018, esto es LM 1787619- 8, por diez días a contar del 21 de diciembre de 2018, y la LM 1803240-6, por diez días a contar del 31 de diciembre de 2018. Lo anterior tiene una explicación SS., ambas licencias médicas debían ser tramitadas por el SSMC, ya que los procesos de remuneraciones se encontraban totalmente cerrados.

Menciona que la denunciante continuó presentando licencias médicas en enero de 2019 hacia adelante, sin tramitarlas ante su empleador, el SAMU Metropolitano, desconociendo de esta forma la destinación dispuesta mediante la resolución exenta N°116675/485/2018. Así es como desde enero de 2019, la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central comenzó a rechazar en la plataforma electrónica, las licencias médicas, ya que no podía y no puede dar curso a licencias de funcionarios que no fueran dependientes. Al mismo tiempo, su representada notificó al SAMU Metropolitano que las licencias médicas estaban siendo rechazadas, debiendo el SAMU contactarse con la funcionaria, para que redireccionara con su médico tratante, dichos documentos electrónicos al SAMU.

Señala que el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas del SAMU Metropolitano realizó las gestiones tendientes a informar dicha situación a la



denunciante, más aquella se manifestó renuente, pues la actora desconoce los efectos de la destinación que debía cumplir en el SAMU Metropolitano a partir del 19 de diciembre de 2021, por ello es que erradamente considera que es el Servicio de Salud Metropolitano Central su empleador, y no como legalmente corresponde, el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU). Indica que aquello también explica el actuar renuente de la denunciante, en orden a no recibir el pago de sus remuneraciones por el empleador legal.

Afirma que el Centro de Atención Prehospitalaria (SAMU) dicta la resolución exenta N°735 de 2019, mediante la cual resuelve no prorrogar la contrata de la denunciante de autos, para el año 2020. De aquello se sigue que, las licencias médicas posteriores a la destinación de la denunciada dispuesta por el Servicio de Salud Metropolitano Central, no podían ser tramitadas por su representada, siendo la propia actora la que en forma contumaz insistía en indicar al SSMC como su empleadora, en circunstancia que legalmente lo que hasta diciembre de 2019, el SAMU Metropolitano.

Añade que las restantes licencias médicas, de data posterior a la resolución exenta N° 735 de 2019, no podían ser tramitadas, por la falta de vínculo estatutario. De ahí que no se advierte hechos indiciarios de vulneración de derecho fundamental alguno.

A continuación, alega la inexistencia de las prestaciones demandadas, señalando que no existe vínculo jurídico alguno entre su representada, el Servicio de Salud Metropolitano Central y la actora, por lo tanto nada adeuda por indemnización adicional por vulneración de derechos, ni cualquiera otra. Ergo, no se ajusta a derecho que mi representada, ni el SAMU Metropolitano, deban pagar a la demandante suma alguna por concepto alguno.

Luego, alega la improcedencia de pago de costas - privilegio de pobreza, indicando que ese Servicio goza de privilegio de pobreza no pudiendo ser condenado en costas, de acuerdo al artículo 81 inciso 2° de la Ley N° 10.383 y el artículo 16 inciso penúltimo del Decreto ley N° 2.763 de 1973, en relación con el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

TERCERO: Que, con fecha 1 de febrero de 2022, se celebró la **audiencia preparatoria**, instancia en la que se efectuó el resumen de la demanda y de la contestación y la parte demandante **evacuó el traslado** respecto de las excepciones opuestas, dejando el tribunal su resolución para definitiva.

Luego, el tribunal **llamó a las partes a conciliación**, proponiéndoles el tribunal las bases para un acuerdo, el cual no se alcanzó.

A continuación, se fijaron como **hecho no controvertido**, el siguiente: **1)** La demandante prestó servicios para la demandada desde el 13 de septiembre de 1994 como funcionaria a contrata.

Acto seguido, se fijaron como **hechos a probar**, los siguientes: **1)** Época para la cual la demandante presto servicios para de la demandada de autos, forma y término del mismo. **2)** Que la demandada fue destinada al Samu Metropolitano, época. **3)** Licencias médicas de la actora institución en las que las presentó. **4)** Recurso de protección y causas vigentes interpuestas por la actora en relación a los hechos de autos. **5)** Contenido de la resolución 735 del 27/11/2019 origen de la misma. **6)** Daños sufridos por la actora a raíz de los hechos antes relatados.

CUARTO: Que, en la audiencia de juicio, la **parte demandante** incorporó los siguientes medios de prueba:



Prueba nueva:

1) Licencias médicas electrónicas del año 2019, entregadas por la Unidad de Transparencia de la Dirección de Servicio con fecha 24-03-2022, ordenada su entrega por el Consejo para la Transparencia (amparo Decisión final de Caso Rol C8978-21) (Folio 427). **2)** Oficio E96337/2021 de fecha 16-04-2021, de Contraloría, mediante el que atiende Oficio N° 032021/FFD/227236, de 2021 DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, que refiere a las operaciones tecnológicas de la programación informática del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Folio 430).

Documental:

1) Resolución N° 1942/2020, de la unidad de protección de derechos funcionarios de Contraloría, referencia a reclamo de ilegalidad Folio R405-2020, que acumula a los Nros. R130/20, y sus complementos R219/20, R220/20. **2)** Reclamo de ilegalidad Folio R405-2020, presentado con fecha 18-03-20, ante el órgano contralor, impugna Resolución Exenta N° 5926 de 31 de diciembre de 2019, sobre renovaciones de contrato del año 2020. **3)** Reclamo de ilegalidad Folio R130-2020, presentado con fecha 27 de enero de 2020, ante el órgano contralor por la actuación ilegal de la Institución denunciada de la medida ilegal de no dictación de la resolución sobre renovación de contrato funcionario de la denunciante del año 2020, toma conocimiento 15-01-2020 ante rechazo recepción de licencia médica continua. **4)** Copia de Licencias médicas N° 32832302-6, N° 3 2832302-6 y N° 3 2882102-6, correspondientes a reposo desde el 26 de noviembre de 2019 hasta el 14 de enero de 2020, copias de las originales que contienen el Rut del empleador N° 61.608.600-6. **5)** Copia de Licencias médicas tramitadas ante Compín, con declaración jurada ante la Inspección del Trabajo, y comprobante de entrega, correspondiente a licencias médicas desde el 15 de enero de 2020, al 28 de enero de 2022, Números: N° 35913681-1, N° 3028998-6, N° 58388074, N° 3144769-0, N° 3201691-K, N° 3265596-3, N° 58388094, N° 58388100, N° 60247054, N° 60247062, N° 60247071, N° 60247078, N° 60247086, N° 60247092, N° 60247099, N° 60459861, N° 60459864, N° 60459865, N° 60459866, N° 60459871, N° 60459872, N° 60459876, N° 60459879, N° 58978279, N° 7775603-5, N° 818428-4, N° 8476380-2, y N° 8877191-5, con constancia de declaraciones juradas conforme a lo previsto en la circular N° 1.126, del año 1989, de la Superintendencia de Seguridad Social, ponderando respecto de los plazos, la concurrencia de una fuerza mayor (art. 54°, D.S., N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud), presentando una declaración jurada ante la Inspección del Trabajo y tramitadas directamente ante la Compín, cuyos comprobantes de entrega y declaraciones juradas, contienen las copias de las licencias tramitadas directamente ante la Compín, atendido el rechazo ilegal de la denunciada. **6)** Listado licencias médicas obtenidas del sistema de apelaciones de la Suseso, reposos entre el 21-12-2018 al 14-01-2020. **7)** Comprobantes de licencias médica electrónicas entre el 21-12-2018 al 13 de marzo de 2019. **8)** Resoluciones COMPIN autorización Licencias Médicas desde marzo 2019 al 27 de junio de 2020. **9)** Resoluciones sobre renovaciones sucesivas de contrato en la Dirección de Servicio: Exenta N° 637 de 25-01-2012; Exenta N° 04, de 07-01-2013; Afecta N° 912 de 25-01-2014, tomada razón, con fecha 27-06-2014, ascenso grado 12° (señala denominación específica); Afecta N° 6015 de 26-12-2015, tomada razón, con fecha 15-01-2015, ascenso grado 10° (señala denominación específica); Exenta N° 5182, 30-12-2015 (mismo cargo de denominación específica renovado); Exenta N° 81 03-02-2017 (mismo cargo



denominación específica renovado); Exenta N° 7758 29-12-2017. **10)** Resolución exenta N° 6031 de fecha 24 de diciembre de 2018, en la “Dirección de Servicio” código 1315. **11)** Resolución N° 233, de 26 de mayo de 2020, la autoridad administrativa competente facultada para el control constitucional de legalidad obligatorio conforme a la Carta Fundamental, Contraloría General de la República, se abstiene de efectuar el control de legalidad. **12)** Recurso de reposición Folio R273-21 de fecha 20 de enero de 2021, presentado por esta denunciante en contra de la Resolución N° 233 de 2020. **13)** Resolución N° 47 de fecha 22 de febrero de 2021, el órgano contralor, se abstiene de resolver el recurso de reposición Folio R273-21. **14)** Querella por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público causa RIT O12683-20 de 04 de agosto de 2020, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. **15)** Resolución N° 1241 de 29 de abril del 2019 de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central, da cuenta que tramitó, periodo entre el 21-12-2018 al 09-01-2019 (20 días). **16)** Solicitud de acceso a la Información SAI N°161.089 de 08-04-2021 de CGR. **17)** Oficio 419 de 10-05-2021, de la Dirección de Servicio en respuesta a oficio E97480 de 21-04-2021 de Contraloría que deriva petición al Servicio, hace entrega de resolución 1241-2019. **18)** Oficio N° E172233-2022 de fecha 06 de enero de 2022 de Contraloría General de la República, mediante el que dicho ente de fiscalización y de Control de la legalidad de los actos emitidos por los órganos públicos referidos al personal de la administración del estado, como la denunciada en estos autos, comunica a la denunciante en estos autos que “Servicio de Salud Metropolitano Central deberá informar la regularización del trámite de las licencias médicas que se indican en el Sistema Siaper, en el plazo que se señala”, que indica que “se constató que, a la fecha, no existe constancia de haberse registrado la aludida resolución N° 1241, de 2019, debiendo ser aclarado que el timbre que presenta el documento que se acompaña, correspondería a la Unidad de Personal y Remuneraciones del Servicio de Salud Metropolitana Central, y no a este Ente Contralor, y que, si bien las licencias médicas N°317876198 y 318032406, de 2018, se encuentran incorporadas en ese sistema, lo están como “Enviadas a la papelera -En trámite”, y no están asociadas a un acto administrativo que las apruebe o rechace”. **19)** Informe de la Compin en autos rol protección 20.049 de 2021, por rechazo infundado de licencias médicas tramitadas con declaración jurada ante la Inspección del Trabajo, desde el 15-01-2020, en el que consta que las anteriores entre 20-12-2018 al 14-01-2020, el RUT del empleador N°61.608.600-6, fila 1 (Folio N° 1787619-8, 10 días entre el 21-12-2018 al 30-12-2018) y en la cuarta página del listado fila última (N°1803240-6, 10 días entre el 31-12-2018 al 09-01-2019). **20)** Resolución Exenta N° 5926 de 31 de diciembre de 2019, sobre renovaciones de contrato del año 2020, cuya ilegalidad de no inclusión de la denunciante se reclamó mediante reclamo por vicios de ilegalidad Folio R-405 presentado 18-03-2020, sobre su impugnación ante órgano competente, pendiente de resolución a la fecha. **21)** Reposición Folio R219/20, R220/20, de fecha 20-02-2020, en contra de Resolución Exenta N° 600 de 05 de febrero de 2020 de Contraloría solicita subsanar Reclamo de ilegalidad Folio R130-2020. **22)** Reclamo ilegalidad Folio 3255 de 27-11-2020, complementa reclamos Folio R130-20, de 27-01-2020; Folio R-405, de 18-03-2020; y Folio 160.030 de 02-01-2019; solicita incorporar solicitud de invalidación a petición de parte de acto contrario a derecho Acto Administrativo Resolución N° 116675/385, de 18 de diciembre de 2018, mediante la interposición en procedimiento invalidatorio regulado en el art. 53 de la ley 19.880 de 2003, (LBPA), presentado el



26 de noviembre de 2020, ante la institución que lo dictó. **23)** Solicitud de fecha 26 de noviembre a petición de parte, efectuada a la Jefatura superior de servicio, para que disponga la invalidación de actos nocivos impuestos por los agentes de estado bajo su supervisión jerárquica mediante el uso ilícito de acto derogado. **24)** Resolución Exenta N° 5853 de 29 de diciembre de 2020, mediante la que la denunciada dispone la prórroga de contratos de funcionarios de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central para el año 2021, cuya ilegalidad se reclamó mediante reclamo por vicios de ilegalidad Folio R339-2021 de fecha 26 de enero de 2021. **25)** Reclamo por vicios de ilegalidad Folio R339-2021 de fecha 26 de enero de 2021, impugna Exenta N° 5853/2020. **26)** Recurso de reclamación ilegalidad Folio R3511-20, presentado con fecha 11-12- 2020, ante el órgano contralor por la actuación ilegal de la Institución denunciada de la medida ilegal de no dictación de la resolución sobre renovación de contrato funcionario de la denunciante del año 2021. **27)** Resolución Exenta RA N° 116675/461/2021 de 24 de diciembre de 2021, registrada en el Sistema SIAPER de Contraloría con fecha 03 de enero de 2022, impugnada mediante reclamo de ilegalidad, Folio: R196-2022 presentado con fecha 12-01-2022. **28)** Reclamo de ilegalidad, Folio: R196-2022 presentado con fecha 12-01-2022, impugna Exenta RA N° 116675/461/2021, sobre renovaciones de contrato del año 2022 en la denunciada institución pública. **29)** Reclamo de ilegalidad Folio 5883 de 14-12-2021, ante el órgano contralor por la actuación ilegal de la Institución denunciada de la medida ilegal de no dictación de la resolución sobre renovación de contrato funcionario de la denunciante del año 2022. **30)** Reclamo de ilegalidad Folio: R62 Año 2022 presentado con fecha 04-01-2022 ante el órgano contralor por la actuación ilegal de la Institución denunciada de la medida ilegal de no dictación de la resolución de concesión del derecho a uso de licencia médica N°8476380-2, reposo desde 29-12-21 al 27-01-22, y no tramitación en el sistema SIAPER de contraloría, para su control de legalidad. Por Oficio N° E172233-2022 de 06-01-2022 se verifica por contraloría que la denunciada mantiene en la papelera del SIAPER las licencias médicas N°31787619-8 y 31803240-6, de 2018. (reposos entre el 20-12-2018 al 30-12-2018, asociadas a contrato resolución N° 6031-2018). **31)** Comprobante tramitación de licencia médica N° 8476380-2, por correo electrónico de fecha 29-12-2021 y 30-12-21 de la Compín. **32)** Liquidación de sueldos del mes de diciembre del año 2018, de la Dirección de Servicio denunciada. **33)** Hoja de registro de control de asistencia desde el mes de enero de 2018 al mes de diciembre de 2018, conforme a contrato Resolución N° 7758 de 22017, contrato 2018, renovado por Resolución N° 6031 de 2018, para el año 2019, obtenida por SAI AO7T1127, de 27/10/2021. **34)** Dictamen 016.6327/2019, de fecha 04-07-2019, de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones que indica incapacidad no configurada. Dicho Dictamen contiene alusión al empleador Dirección de Servicio, asociadas al contrato funcionario Resolución N° 6031 de 2018, según consta en el trámite de calificación de invalidez iniciado ante la Superintendencia de Pensiones con fecha 04 de febrero de 2019, Expediente de Calificación de Invalidez N° 255904. **35)** Resolución C.M.C. N°9050/2019, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, ejecutoriado el 12-09-2019, confirma dictamen 016.6327/2019, incapacidad no configurada, tramite asociado a empleador denunciado, contrato funcionario Resolución N°6031-2018. **36)** Dictamen N° 016.210/2020, de fecha 08-01-2020, correspondiente al segundo proceso de calificación, iniciado con fecha 14 de octubre de 2019, asociado al mismo contrato funcionario resolución 6031-2018, emitidas



todas las licencias médicas conforme a dicho contrato (de las que tramitaron 20 días Resolución 1241- 2019), figura en dicho dictamen N°016.210 como empleador el “Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria”, interviniendo la denunciada los sistema de control del personal del estado para obstruir el ejercicio del derecho a uso de licencias médicas y tramite de calificación de invalidez. **37)** Dictamen de invalidez Resolución N° C.M.C. 10997/2020, de fecha 02 de noviembre de 2020, de la Comisión Médica Central (CMC), de la Superintendencia de Pensiones que declara invalidez de un 58%, la que se encuentra impugnada en Recurso de Protección Rol 18.755-2021, ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago. **38)** Recurso de Protección Rol 18.755-2021, ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago. **39)** Recurso de Protección Rol 20.049-2021, ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, por rechazo de licencias médica por la COMPIN y SUSESO, fundada en carta emitida por la denunciada en estos autos de no renovación del que considera contrato funcionario Resolución N° 385-2018, mera asignación de funciones denunciada su falsificación ideológica y material y uso ilícito de acto derogado, ante el 7° Juzgado de garantía, querella Rit O-12683 de 04-08-2020. **40)** Escrito téngase presente Oficio N° E172233-2022 de fecha 06 de enero de 2022 de Contraloría General de la República, en autos rol protección 20.049-2021. **41)** Certificado de 07-01-22, ingreso Escrito téngase presente Oficio N° E172233-202, de 06-01-22, Contraloría General de la República, dispone: “Servicio de Salud Metropolitano Central deberá informar la regularización del trámite de las licencias médicas que se indican en el Sistema Siaper, en el plazo que se señala”. **42)** Dictamen N° 22.766 de 24-03-2016 de Contraloría, Jurisprudencia vinculante de orden constitucional. **43)** Dictamen N° 85.700, de 28-11-2016, de Contraloría, Jurisprudencia vinculante de orden constitucional. **44)** Dictamen N° 653, de 05-01-2007, de Contraloría, Jurisprudencia vinculante de orden constitucional. **45)** Resolución N° 735 de 27-11-2019, dictada por el SAMU Metropolitano, no renovación del que considera contrato funcionario Resolución N° 385-2018, mera asignación de funciones denunciada su falsificación ideológica y material y uso ilícito de acto derogado, ante el 7° Juzgado de garantía, querella Rit O-12683 de 04-08-2020. **46)** Recurso de reclamación Folio R1341-20, contra resolución 735 de 27-11-2019, dictada por institución que no es mi empleadora. **47)** Circular N° 1588 de 16 de junio de 1997, de la Superintendencia de Seguridad Social, contiene Circular N°2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, dictada considerando la Circular N° 9208, de 3 de junio de 1983, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. **48)** Solicitud de Acceso a la Información Pública, SAI 5885/2021, de 20-10-21 Contraloría, mediante la que solicito decretos y resoluciones sometidas a control legal de registro en el Sistema SIAPER de Contraloría, periodo correspondiente al otorgamiento de licencias y respaldos médicos dictadas por la denunciada, desde el mes de enero de 2019 al mes de diciembre de 2020, relativos a la vida funcionaria de la dotación de la institución “Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central”, tramitados en el sistema SIAPER de Contraloría. **49)** Oficio E150676/2021 de 27-10-2021, Contraloría General de la República, deriva al Servicio de Salud Metropolitano Central, SAI 5885/2021. **50)** Solicitud de Acceso a la Información Pública SAI Folio: 006633, Año: 2021 (03-12-2021), reitera SAI 5885/2021, de 20-10-21. **51)** Solicitud de Acceso a la Información Pública SAI AO007T0001145 de 03/12/2021, de la Denunciada Dirección de Servicio, solicito respuesta a Oficio E150676/2021 de 27-10-2021 de contraloría. **52)** Carta de fecha 03/01/2022, de la recurrida por ley transparencia SAI



AO007T0001145 de 03/12/2021, prorroga plazo entrega respuesta para el 17-01-2022, a la fecha no entregada “los decretos y resoluciones sometidas a control legal de registro en el Sistema SIAPER de esa Contraloría, correspondiente al otorgamiento de licencias y respaldos médicos, desde el mes de enero de 2019 al mes de diciembre de 2020, relativos a la vida funcionaria de la dotación de la institución “Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central”, tramitados en el sistema SIAPER de Contraloría.

Testimonial:

-Jamilia Karina Espir Cifuentes, administradora de empresa, quien previamente juramentada presta declaración, cuyo contenido consta íntegramente en el registro de audio.

Oficios:

1) Contraloría General de la República, a fin que remita al Tribunal los reclamos individualizados exponiendo los antecedentes y estado de tramitación del mismo.

Causas a la vista:

1) Causa RIT T-1987-2019 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago:
a. Recurso de Nulidad, presentado en contra de sentencia fecha 25-08-2021, en autos sobre tutela laboral RIT T-1987-2019. b. Certificado N° 3-58381196-2021, de fecha 06 de septiembre de 2021, de ingreso de recurso de nulidad en contra de sentencia fecha 25-08-2021 y; c. Resolución de fecha 22 de septiembre de 2021, de la ltma. Corte de Apelaciones rol Laboral-Cobranza 3031-2021, que declara admisible recurso de nulidad. **2)** Requerimiento de inaplicabilidad Rol INA 11.210-21 INA de 15-06-2021, declaradas inadmisibles por resolución de 08-07-21, por cuanto el Tribunal laboral no hace entrega de certificado de gestión pendiente, hasta finalizado el día 07 de julio de 2021, certificado que indica que esta parte se encuentra citada a audiencia preparatoria para dicha fecha. **3)** Causa Rol N° Protección 20.049-2021, de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, tener a la vista los siguientes escritos de téngase presente en dicha causa: a. Folio 18 de 17-08-2021, sobre impugnación de la Resolución N° 735, ante la autoridad competente CGR; b. Folio 19, escrito de 29-09-2021, título ejecutivo de licencias médicas y perjuicios; c. Folio 33, escrito téngase presente Recurso de Nulidad, presentado en contra de sentencia fecha 25-08-2021, en autos sobre tutela laboral RIT T1987-2019; d. Escrito de fecha 07 de enero de 2022, téngase presente Oficio N° E172233-2022 de fecha 06 de enero de 2022 de Contraloría General de la República, mediante el que dicho ente de fiscalización y de Control de la legalidad de los actos emitidos por los órganos públicos referidos al personal de la administración del estado, como la denunciada en estos autos, comunica a la denunciante en estos autos que “Servicio de Salud Metropolitano Central deberá informar la regularización del trámite de las licencias médicas que se indican en el Sistema Siaper, en el plazo que se señala”, que indica que “se constató que, a la fecha, no existe constancia de haberse registrado la aludida resolución N° 1241, de 2019, debiendo ser aclarado que el timbre que presenta el documento que se acompaña, correspondería a la Unidad de Personal y Remuneraciones del Servicio de Salud Metropolitana Central, y no a este Ente Contralor, y que, si bien las licencias médicas N°317876198 y 318032406, de 2018, se encuentran incorporadas en ese sistema, lo están como “Enviadas a la papelería -En trámite”, y no están asociadas a un acto administrativo que las apruebe o rechace” . e. Sentencia de fecha 29 de diciembre de 2020 autos rol 92.120-2020,



Excma. Corte Suprema, sobre recurso de revisión de sentencia de 06-08- 2019 rol protección 4159-19. f. Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2016, autos rol INA 3005-2016, Excmo. Tribunal Constitucional, señala en su sentencia en el apartado sobre prevenciones, N° 1, del Ministro Señor Aróstica, que conforme a la ley 20.087 de 2006, que sustituyó el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, otorgó mérito ejecutivo al reconocimiento de una obligación laboral o previsional, cuyo es el caso de las declaraciones para la tramitación de las licencias médicas que se adjuntan señaladas en el numeral 5, del apartado I, sobre prueba documental de la presente minuta. **4)** Recurso de Protección Rol 18.755-2021, ante la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago. **5)** Querella por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público causa RIT O12683-20 de 04 de agosto de 2020, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, uso ilícito de acto resolución 385-2018, para generar cheques y emitir liquidaciones sin contar con contrato funcionario.

QUINTO: Que, la **parte demandada** incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1) Resolución Exenta RA N° 116675/385/2018 de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, que dispone la destinación de doña Hertha Muñoz Escobar al SAMU Metropolitano. **2)** Resolución Exenta N° 735 de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección del SAMU Metropolitano, que dispone la no renovación de la contrata de doña Hertha Muñoz Escobar, para el periodo 2020, con documentos adjuntos debidamente notificados. **3)** Copia de liquidaciones de remuneraciones de doña Hertha Muñoz Escobar, del periodo enero 2019 a diciembre de 2019. **4)** Informe de Hoja de Vida Funcionaria de doña Hertha Muñoz Escobar, emitida por el SAMU Metropolitano. **5)** Certificado de relación funcionaria de doña Hertha Muñoz Escobar, del SAMU Metropolitano. **6)** Memorándum N° 126, de 22 de noviembre de 2019, solicita informe de presentación de licencias médicas de la denunciante, de Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Metropolitano Central dirigido al Depto. de Asesoría Jurídica, y Memorándum N° 11, de 3 de enero de 2020, que informa en derecho sobre presentación de licencias médicas de doña Hertha Muñoz E., de Depto. Asesoría Jurídica del SSMC a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Metropolitano Central. **7)** Ordinario N° 6, de 16 de enero de 2020, mediante el que se informa situación funcionaria de la denunciante, de Dirección del Centro Metropolitano de Atención Pre hospitalaria (SAMU Metropolitano) dirigido a la Contraloría General de la República. **8)** Ordinario N° 65, de 20 de enero de 2022, mediante el cual se informa sobre presentación N° E172233/2022. REF. N° 161.947/2021 de doña Hertha Muñoz Escobar, que dirige la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central a la Contraloría General de la República. **9)** Oficio de la I. Contraloría Metropolitana Regional de Santiago N° E120245/ 2021, que comunica nuevamente el archivo de las presentaciones formuladas por doña Hertha Muñoz Escobar, de acuerdo al apercibimiento establecido al efecto, de fecha 8 de julio de 2021. **10)** Oficio de la I. Contraloría Metropolitana Regional de Santiago N° E135559/2021, que comunica nuevamente el archivo de las presentaciones formuladas por doña Hertha Muñoz Escobar, de acuerdo al apercibimiento establecido al efecto, de fecha 3 de septiembre de 2021. **11)** Oficio de la I. Contraloría Metropolitana Regional de Santiago N° E152622/2021, que comunica



nuevamente el archivo de las presentaciones formuladas por doña Hertha Muñoz Escobar, de acuerdo al apercibimiento establecido al efecto, de fecha 3 de noviembre de 2021. **12)** Sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso de protección Ingreso Corte N° 4159-2019, de fecha 6 de agosto de 2019. **13)** Sentencia dictada por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT T-1987-2019, de fecha 25 de agosto de 2021. **14)** Copia de cheques nominativos emitidos por SAMU Metropolitano, por pago de remuneraciones de doña Hertha Muñoz Escobar de fecha 29 de enero de 2021, por la suma de \$16.253.688, de 30 de junio de 2021, \$16.253.688, de 31 de octubre de 2021, por la suma de \$16.253.688 y de 18 de enero de 2022, por la suma de \$16.253.688. **15)** Publicación del Decreto N° 1.065, de 9 de agosto de 2018, del Ministerio de Hacienda, que fija fecha de pago de sueldos del último cuatrimestre del año 2018 para el personal del sector público.

Testimonial:

-**Rafael Orlando García Jiménez**, administrador público, quien previamente juramentado presta declaración, cuyo contenido consta íntegramente en el registro de audio.

Causas a la vista:

1) Causa Rol N° Protección 20.049-2021, de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago. **2)** Causa Rol N° Protección 4.159-2019 de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago. **3)** Causa RIT T-1.987-2019 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

SEXTO: Que, del análisis de la prueba rendida en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo presente la gravedad, concordancia y conexión de los medios de prueba aportados por las partes, **se tienen por establecidos** los siguientes hechos:

1º) La circunstancia que la demandante prestó servicios para la demandada Servicio de Salud Metropolitano Central desde el 13 de septiembre de 1994, como funcionaria a contrata, perteneciendo al estamento profesional grado 10, escala única de sueldos, siendo renovada su contratación en forma sucesiva.

Lo anterior es un hecho no controvertido en autos, de acuerdo a los escritos de demanda y contestación.

2º) La circunstancia que con fecha 18 de diciembre de 2018, mediante Resolución Exenta N° 16675/385/2018, la denunciada ordenó la destinación de la demandante al Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU, a partir del 19 de diciembre de 2018.

La conclusión anterior se acredita con la prueba documental incorporada por la parte demandada consistente en la referida Resolución Exenta N° 16675/385/2018, de 18 de diciembre de 2018.

3º) La circunstancia que la demandante, con fecha 17 de enero de 2019, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, por la dictación de la Resolución Exenta N° 16675/385/2018, de 18 de diciembre de 2018, que dispone la destinación para desempeñarse en el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria SAMU, a contar del día 19 de diciembre de 2018, causa tramitada bajo el Rol 4.159-2019 y que fue resuelta mediante sentencia de 6 de agosto de 2019, rechazándose el recurso de protección deducido por la demandante, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.



Lo anterior se acredita con la causa solicitada tener a la vista por la parte demandada, causa Rol 4.159-2019 tramitada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

4º) La circunstancia que a contar del 19 de diciembre de 2018, la demandante gozó de licencias médicas, las que han sido emitidas a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Central y las que no fueron tramitadas ni pagadas en razón de que se ha señalado como empleador al Servicio de Salud Metropolitano central y no al Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU.

La concusión señalada es un hecho no discutido en los escritos fundamentales y se corrobora con el mérito de la prueba documental incorporada por la parte demandante consistente en copia de las licencias médicas.

5º) La circunstancia que mediante Resolución Exenta N° 6031, de 24 de diciembre de 2018, pronunciada por la Dirección del Servicio de Salud, se renovó la contrata de la actora hasta el 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior se acredita con el mérito de la prueba documental incorporada por la parte demandante consistente en la aludida Resolución N° 6031, de 24 de diciembre de 2018.

6º) La circunstancia que con fecha 29 de noviembre de 2019, la parte demandante interpuso denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con relación laboral vigente, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, causa tramitada ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo, bajo el RIT T-1987-2019; luego, mediante sentencia de 25 de agosto de 2021 se rechazó íntegramente la denuncia; posteriormente, por sentencia de 7 de abril de 2022, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol 3031-2021, se rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante y por sentencia de 8 de julio de 2022, la Excma. Corte Suprema declaró inadmisile el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte denunciante.

Así fluye de la aludida causa RIT 7-1987-2019 seguida ante este mismo tribunal, solicitada tener a la vista por ambas partes.

7º) La circunstancia que mediante Resolución Exenta N° 735, de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección del SAMU Metropolitano, se dispone la no renovación de la contrata de doña Hertha Muñoz Escobar, para el periodo 2020.

Lo anterior se acredita con la prueba documental incorporada por la parte demandada consistente en la aludida Resolución Exenta N° 735, de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección del SAMU Metropolitano.

8º) La circunstancia que con fecha 22 de marzo de 2019, la demandada informó a la denunciante la solicitud de modificar como empleador a la denunciante en virtud de la destinación de la que fue objeto.

Así fluye de la prueba documental incorporada por la parte demandante consistente la carta y comunicación de envío de la misma al domicilio de la denunciante efectuado por Correos de Chile, instrumentos no objetados por la denunciante.

9º) La circunstancia que la demandante, con fecha 20 de mayo de 2021, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, y en contra de la Superintendencia de Pensiones por los supuestos actos ilegales y arbitrarios durante el proceso de declaración de invalidez parcial, seguida en causa Rol 18.755-2021, la



que fue resuelta mediante sentencia de 25 de mayo de 2022, rechazándose el recurso de protección deducido por la demandante, confirmándose la sentencia mediante fallo de la Excm. Corte Suprema de 11 de agosto de 2022, en la causa Rol 22.237-2022.

Lo anterior se acredita con la causa solicitada tener a la vista por la parte demandante, causa Rol 18.755-2021, tramitada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

10º) La circunstancia que la demandante, con fecha 22 de mayo de 2021, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, el Superintendente de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el rechazo de 10 licencias médicas continuas entre el 28 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021, seguida en causa Rol 20.049-2021, la que fue resuelta mediante sentencia de 25 de mayo de 2022, rechazándose el recurso de protección deducido por la demandante, confirmándose la sentencia mediante fallo de la Excm. Corte Suprema de 11 de agosto de 2023, en la causa Rol 20.992-2022.

Así se acredita con la causa solicitada tener a la vista por ambas partes, causa Rol 20.049-2021, tramitada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

11º) La circunstancia que las liquidaciones de remuneraciones de enero a diciembre de 2019 fueron emitidas por el Centro Metropolitano Atención Prehospitalaria y en la remuneración del mes de diciembre de 2019, la actora percibió una remuneración bruta de \$1.718.712.

Lo anterior se acredita con el mérito de las liquidaciones de remuneraciones incorporadas por la parte demandada.

SÉPTIMO: Que, se ha ejercido en autos la acción de tutela laboral con ocasión del despido, contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo, basada en una serie de supuestos hechos vulneratorios de garantías constitucionales que habrían concluido con la desvinculación de la actora en el Servicio de Salud Metropolitano Central.

La parte demandada contestando la demanda solicita el rechazo de la demanda, controvirtiendo los hechos en que se fundamenta, oponiendo, además, las excepciones de falta de legitimación activa por preclusión procesal, caducidad de la acción de tutela laboral y falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Metropolitano Central y de falta de legitimación activa de la demandante de autos.

De esta forma el tribunal emitirá pronunciamiento en cuanto a la preclusión procesal alegada por la parte demandada y en caso de que sea rechazada se pronunciará respecto de las demás excepciones y acciones opuestas por las partes.

OCTAVO: Que, cabe tener presente para efectos de centrar la controversia planteada, que tal como se dejó establecido en el motivo sexto de esta sentencia, que la actora desempeñó funciones para el Servicio de Salud Metropolitano Central, desde el 13 de septiembre de 1994, en calidad de contrata y por ello, le resultan aplicables las normas de tutela de derechos fundamentales, por aplicación directa de lo establecido en el inciso 3º del artículo 1 del Código del Trabajo, al no encontrarse establecido, ni regulado un procedimiento de Tutela Laboral en el Estatuto que la rige como funcionaria pública.

NOVENO: Que, lo que respecta a la preclusión procesal alegada por la denunciada por haberse ejercido previamente la acción constitucional prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, conviene tener presente que el



inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo establece: “*Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos*”.

Luego, tal como se dejó establecido en el motivo sexto de esta sentencia, la actora interpuso una primera acción de protección (Rol Corte N° 4.159-2019) en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, por la dictación de la resolución que dispuso su destinación para desempeñarse en el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria SAMU, acción que fue tramitada, concluyendo a través de sentencia de 6 de agosto de 2019, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago.

Posteriormente, la actora interpuso una segunda acción de protección (Rol Corte N° 18.755) en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, y en contra de la Superintendencia de Pensiones por los supuestos actos ilegales y arbitrarios durante el proceso de declaración de invalidez parcial, acción que fue tramitada y resuelta mediante sentencia de 25 de mayo de 2022, rechazándose el recurso de protección deducido por la demandante, confirmándose la sentencia mediante fallo de la Excma. Corte Suprema de 11 de agosto de 2022, en la causa Rol 22.237-2022.

Finalmente, la demandante interpuso una tercera acción de protección (Rol Corte N° 20.049-2021) en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, el Superintendente de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el rechazo de 10 licencias médicas continuas entre el 28 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021, recurso que fue resuelto mediante sentencia de 25 de mayo de 2022, rechazándose la acción deducida por la demandante, confirmándose la sentencia mediante fallo de la Excma. Corte Suprema de 11 de agosto de 2022, en la causa Rol 20.992-2022.

Pues bien, de los recurso de protección tenidos a la vista, es posible concluir que todas las acciones e impugnaciones de la parte denunciante tienen su origen en la Resolución Exenta N° 16675/385/2018, de 18 de diciembre de 2018, que dispuso la destinación de la demandante al Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU y es posible concluir que la actora ha esgrimido los mismos argumentos de hecho que se ventilan en estos antecedentes (RIT T-1589-2021), razón por lo cual sólo cabe concluir que operó la preclusión por consumación, agotando a través del ejercicio de la referida acción constitucional la posibilidad de pronunciarse sobre la misma en esta sede, por lo cual deberá acogerse dicha excepción, ya que al haber optado la denunciante por dicha vía se encuentra vedada la posibilidad de acceso en ese punto, por lo que se rechazará la denuncia interpuesta.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que mediante sentencia de 25 de agosto de 2021, se rechazó íntegramente la denuncia tramitada ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo, bajo el RIT T-1987-2019; sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada y en la cual el sentenciador se hizo cargo de las supuestas vulneraciones alegadas por la denunciante, estableciendo que la actora no rindió prueba alguna que diera cuenta que la medida de destinación no tenga por objeto prestar sus labores en un mismo empleo de la misma institución, siendo un organismo creado por la denunciada en el ejercicio de sus atribuciones y delegación de las mismas, para el mejor ejercicio de las labores que la ley le encomienda, agregando que el recurso de protección (Rol Corte N° 4.159-2019) dejó



establecido como hechos que la denunciante se trata de una persona que es administradora pública –no auditora como sostiene en el libelo-, siendo trasladada a un recinto de la misma comuna, manteniéndose el mismo grado y remuneraciones no advirtiéndose perjuicio alguno, encontrándose evidentemente facultado el jefe de servicio por razones de buen servicio para disponer la destinación, tal como ocurre en la especie, concluyéndose que, compartiendo el criterio de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, no advierte ilegalidad y arbitrariedad en la decisión, agregando que tampoco el procedimiento de tutela tiene por objeto examinar la legalidad del mismo, escapando de esta sede dicho cuestionamiento.

Dicha sentencia, también se pronunció acerca de las circunstancias relativas a la existencia de falsificación de sellos, expulsiones de grupos de funcionarios, persecución política, reaperturas de sumario o impedir el ejercicio de cargos que tenía, razonando que siendo carga de la denunciante de acreditar tales aseveraciones, no incorporó prueba alguna de ellos, sin perjuicio que resulta inverosímil suponer una persecución política de una persona que se declara como alguien que no tiene afinidad política con partido político alguno manteniéndose en sus funciones durante 24 años hasta la medida de destinación, desarrollando sus labores en gobiernos de distintas ideologías políticas.

Asimismo, la sentencia aludida se pronuncia sobre el no pago de remuneraciones, confección de liquidaciones por otro “empleador”, vulneración del sistema personal, pago de cotizaciones de seguridad social por un “empleador distinto”, modificación de hoja funcionaria y no tramitación de licencias médicas, estableciendo que la medida de destinación al Centro de Atención Prehospitalaria es un acto administrativo y como tal debe estarse a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 19.880, norma que expresa: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediere una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”. Añade que en ese contexto no existiendo acto o decisión alguna que haya dejado sin efecto la destinación o haya suspendido sus efectos, sólo cabe estimar que el mismo produce sus plenos efectos, por lo cual malamente puede estimarse que la administración incurrió en una conducta arbitraria o ilegal al realizar las actuaciones que son consecuencia de la validez del mismo, ajustándose la administración al mismo.

Además, la sentencia referida se pronuncia en cuanto a la negativa de tramitación de licencia médica por parte de la denunciada, rechazando dicha alegación, desde que las propias partes establecieron como hecho pacífico que las mismas no han sido pagadas en razón que la propia actora insiste en indicar como entidad con la que tiene el vínculo estatutario a la denunciada, en circunstancia que fue destinada al Centro de Atención Prehospitalaria, acto que, como se indicó precedentemente, se encuentra vigente, produciéndose la vulneración sostenida por la denunciante a consecuencia de su propio actuar, la que no se puede aprovechar de su propio dolo o culpa para alegar una conducta antijurídica por parte de la administración del Estado.

También, la sentencia aludida se refiere a la negativa de proceder al pago de sus remuneraciones, estableciendo que tampoco puede estimarse como configurada, desde que la denunciante no rindió prueba alguna de ello; al contrario, los cheques y



la comunicación acompañada por la denunciada, lo que es ratificado por su testigo, dan cuenta que es la propia trabajadora la que se ha negado a buscarlo, cuestión que por lo demás fue expresamente reconocida por ella en la etapa de conciliación llevada a cabo en la audiencia preparatoria, justificando su actuar en que no le depositaban su estipendio, lo que en ningún caso puede estimarse como un hecho indiciario de vulneración a las garantías constitucionales de la denunciante, agregando que, si bien señaló que al resto de los funcionarios les pagan su remuneración mediante transferencia electrónica o depósito, lo cierto es que no agregó antecedente alguno sobre ese punto, sin perjuicio que dicha circunstancia no fue sostenida como hecho indiciario en la denuncia.

Finalmente, la sentencia mencionada agrega que tampoco se vislumbra un hostigamiento por parte de la denunciada por la remisión de cartas solicitando el cambio del empleador, desde que la denunciante no acompañó prueba sobre este punto, constando únicamente en los antecedentes agregados una sola comunicación remitida a través de memorándum a la denunciante explicándole las razones por las cuales se ha tenido que devolver las licencias médicas, anotadas en el considerando décimo tercero, lo que malamente puede estimarse como un hostigamiento, solicitándole el envío de la misma por la entidad a la que fue destinada.

Así, es posible concluir que todos los hechos denunciados y vinculados a la destinación de la actora al Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU no pueden ser constitutivos de vulneración de las garantías constitucionales alegados por la actora.

De esta forma, habiéndose acogida la primera excepción opuesta por la demandada y habiéndose rechazado la denuncia de tutela laboral, resulta innecesario emitir pronunciamiento en cuanto a las demás excepciones planteadas.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anteriormente razonado y a mayor abundamiento, cabe mencionar que la actora adicionalmente alega que no existió acto de no renovación de la contrata que emanara de la demandada Servicio de Salud Metropolitano, alegación que es del todo improcedente, por cuanto se ha dejado establecido en la sentencia de 25 de mayo de 2022, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el Recurso de Protección Rol 20.049-2021, en su considerando sexto que: *“(...) Al respecto, se desprende de los antecedentes allegados a la causa que es efectivo el hecho de haber sido materializado el traslado de la recurrente (...), por lo que no correspondía a la recurrida Servicio de Salud Metropolitano la tramitación del reposo indicado, excediendo dicha gestión sus facultades.* Luego, en su motivo séptimo, la referida sentencia agrega: *“(...) no se advierte por esta Corte actuación ilegal o arbitraria, toda vez que el rechazo de las licencias médicas que se individualizan responde a una circunstancia objetiva, esto es, la carencia de vínculo entre la actora y el empleador que ella misma individualiza al momento de ser emitidas.*

Así las cosas, resulta ser efectivo lo alegado por la demandada, en el sentido de que, a partir del 19 de diciembre de 2019, el vínculo estatutario de la actora pasó a ser con el Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU y no con el Servicio de Salud Metropolitano, por tanto la decisión de no renovar su contrata le correspondía al Centro Metropolitano de Atención Pre Hospitalaria SAMU, lo que en la especie ocurrió a través de la dictación de la Resolución Exenta N° 735, de 27 de noviembre de 2019.



Resulta conveniente también señalar que llama la atención de este sentenciador la persistencia de la parte demandante en recurrir constantemente a la judicialización de las consecuencias que se produjeron con ocasión de su destinación, actos respecto del cual se descartó su ilegalidad o arbitrariedad en diversas instancias judiciales y administrativas, insistiendo la actora en sindicar como entidad con la que tiene el vínculo estatutario a la denunciada, en circunstancias que fue destinada al Centro de Atención Prehospitalaria.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la acción de indemnización del daño moral, cabe consignar que en este caso el fundamento de dicha pretensión, se hace consistir en la vulneración de los derechos fundamentales de la actora con ocasión del despido. Sin embargo, no habiéndose acreditado la vulneración de derechos alegada y no derivándose, en consecuencia, responsabilidad por daño moral, no cabe más que rechazar también tal pretensión indemnizatoria.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la demanda subsidiaria, debe señalarse primeramente que, es un hecho establecido en la causa, que la actora desempeñó funciones para la demandada, desde el 13 de septiembre de 1994, como funcionaria a contrata, debiendo efectuarse las siguientes precisiones.

En primer término, el artículo 1 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo prescribe: *“Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo...”*.

Asimismo el artículo 2° del mismo texto legal dispone: *“Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1°...”*.

También debe tenerse presente que el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración del Estado no tiene naturaleza convencional, sino que es materia de ley, conforme lo establece el inciso 1° del artículo 38 de la Constitución Política de la República, en orden a que la ley orgánica constitucional básica de esa Administración debe versar, entre otras materias, sobre la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que ella deba fundarse, y de los que prescribe el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 , sobre Bases Generales de la Administración del Estado y sus modificaciones, en relación a que: *“el personal de esta Administración se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones”*.

Por lo demás, el artículo 1 inciso 2° del Código del Trabajo dispone: *“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”*.

En concepto de este sentenciador, lo cierto es que en el caso de las contrataciones efectuadas bajo la figura de “contrata” establecida en el artículo 3° de la Ley N° 18.834, ello es imposible, toda vez que esa contratación nunca puede mutar a una laboral porque su esencia es el desempeño de un empleo público regido por la ley en referencia y sometido a un estatuto distinto al del Código del Trabajo, y tanto es así que el citado artículo 3°, en su letra c) establece expresamente que



“empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.

De esta forma, habiéndose desempeñado la demandante en calidad de contrata, y siendo su cargo, en consecuencia, un empleo público, regido por el Estatuto Administrativo, es imposible establecer que dicha vinculación fue de carácter laboral.

En consecuencia y por todo lo antes razonado, este sentenciador estima que la acción subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones no puede prosperar, por cuanto se funda en normas contenidas en un Estatuto Jurídico diverso al aplicable a la actora de autos, motivo por el cual se procederá a su rechazo.

En todo caso, lo anterior no obsta al hecho que los servicios ejecutados por la demandante de autos se hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, y sujeta a la dependencia e instrucciones de jefaturas, u otros elementos que pudieren asimilarse a una relación de naturaleza laboral, pues las referidas condiciones igualmente pueden establecerse para los funcionarios contratados bajo el régimen “a contrata”, como lo ha sido la demandante de autos.

DÉCIMO CUARTO: Que, la prueba rendida en autos, ha sido analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica y el material probatorio no aludido expresamente en los considerandos precedentes en nada altera lo razonado por el tribunal.

DÉCIMO QUINTO: Que, habiendo resultado totalmente vencida, la parte demandante será condenada al pago de las costas, por estimarse que no ha litigado con motivo plausible.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 5º, 420 y siguientes, 456, 459, 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 19, números 1 y 16 de la Constitución Política de la República, Ley N° 18.834 y demás normas pertinentes, **se declara:**

I.- Que se **rechaza** en todas sus partes la demanda interpuesta por doña **HERTHA EUGENIA DEL CARMEN MUÑOZ ESCOBAR**, ya individualizada, en contra de la **DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL**, ya individualizado.

II.- Que se condena en costas a la parte demandante, regulándose las personales en la suma de \$200.000.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT T-1589-2021.

Dictada por don **Daniel Eduardo Leiva Rojas**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



GCSQXXVLEDL

A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>